

Antiguos nuevos problemas: la deuda social de la democracia argentina*

*Javier Franzé***

* Agradezco los comentarios de Julián Melo y de Santiago Curci sobre este artículo.

** Doctor en Ciencias Política por la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor investigador en la misma universidad. Correo electrónico: jmfranze@ucm.es. ORCID: 0000-0002-9782-4385.

Quebrando la imagen clásica de la política como mera expresión de lo económico, en la Argentina hasta mediados de los setenta la economía tenía un buen desempeño en términos de desarrollo y equidad, pero el problema era la política —entendida como lo instituido—. Del mismo modo, desde la transición en 1983 la política ha sido capaz de sostener la aspiración colectiva a la democracia, mientras que la economía ha producido una creciente desigualdad que ha difuminado la cohesión social de los 70. Esta simplificación deliberada busca enfatizar las tensiones entre lo que en verdad son *dos aspectos de lo político* —entendido como lo instituyente—, que podríamos nombrar como las reglas del juego del orden y la distribución de la riqueza social. Ambos resultan de la lucha entre valores inconmensurables por el sentido de la comunidad y del lugar de los sujetos en ella. En efecto, lo económico no traslada un significado “objetivo” de “la realidad” expresada en “los datos”, capaz de moldear *per se* el orden y los sujetos, por lo que no podría ser un nivel, ni determinante ni determinado. Del mismo modo, la política no racionaliza el alimento que le inyecta la economía, por lo que no puede ser una mera superestructura, sino la coagulación precaria de lo político, siempre en movimiento y transformación, siempre desigual a sí mismo.

Si lo económico fuera la clave de bóveda del orden social, la Argentina de los años 70 no tendría que haber tenido mayores conflictos, pues la sociedad era homogénea, no estaba cruzada por una gran desigualdad y su nivel de desarrollo era más que aceptable en términos de modernización. Sin embargo, un *pequeño* detalle lo conmovía todo: el partido mayoritario estaba proscripto desde 1955, su líder vivía en el exilio y sus seguidores no podían organizarse como tales, tampoco mentar su filiación política ni nombrar a su líder. La relativa equidad social no hizo olvidar la aspiración a la igualdad política, a que el líder pudiera retornar al país, ni a que el partido pudiera competir en elecciones libres.

Del mismo modo, tras el terrorismo estatal y la guerra de Malvinas que dejó la dictadura iniciada en 1976, la democracia obtuvo una legitimidad quizá inédita en la historia del país. Sin embargo, la vocación conjunta de recorrer ese camino, animada en gran medida por la noción de igual dignidad que anida en los Derechos Humanos, no alcanzó para

lograr un modo equitativo de distribuir la riqueza social, hasta tal punto que si se partiera de la primacía de lo económico resultaría difícil explicar la longevidad de la democracia.

En efecto, los treinta y ocho años de democracia que se acaban de cumplir en la Argentina, el mayor periodo sin golpes de Estado y con elecciones libres, son ya un éxito e invitan a felicitarse. Pero precisamente el valor de ese logro colectivo inédito puede estar obturando el reconocimiento de otro hecho no menos importante, en especial para las fuerzas progresistas: el fracaso de la democracia social en la Argentina.

En efecto, el comprensible temor a que tan desolador diagnóstico sea cargado a la cuenta de la democracia, justo además cuando las fuerzas de la extrema derecha neoliberal avanzan,¹ retrae el juicio. Pero son otros los factores que quizá estén también actuando: verbigracia, la reducción de todo “debate” —que acaba por no ser tal— a lo que en España se denomina el “y tú más”, es decir, el contentarse con no ser peor que el adversario. Así es, la acusación de corrupción del macrismo al kirchnerismo es contestada por éste con la de endeudar al país, así como la aspiración a “salvar al Pueblo y a la Nación” por parte del kirchnerismo es retrucada con la de “salvar la República” por parte de los macristas.

Han sido enormes los avances en estas casi cuatro décadas de democracia política en la Argentina. No sólo por aquello a lo que se aspiraba al inicio del camino, allá por 1982-1983: la fría continuidad institucional, imaginada como solución a la recurrente prepotencia de los poderes corporativos y privados. Estas décadas transcurridas han mostrado también los efectos de la democracia *como proceso*. Sus efectos han sido potentes en términos de cultura política: identidades, valores, rituales, agenda pública se han ido transformando.

¹ Una de las novedades de las últimas elecciones legislativas de 2021 en Argentina fue el 17 por ciento obtenido en la Ciudad de Buenos Aires por la coalición La Libertad Avanza, liderada por el economista Javier Milei, que le permitió ser la tercera fuerza tras Juntos por el Cambio (macrismo) y Frente de Todos (kirchnerismo). Milei se presenta como liberal-libertario, seguidor de la Escuela Austríaca de Economía. Su discurso, cercano al de Bolsonaro, es fuertemente anticomunista, antikirchnerista y contrario a lo que denomina la “casta” política.

A diferencia del inestable periodo previo a 1983, la competencia política principal ya no se da entre dos formaciones nacional-populares —como eran la Unión Cívica Radical y el peronismo—, sino más bien entre un polo de centro-izquierda, de fuerte anclaje nacional-popular, y otro de centro-derecha, de raigambre liberal-conservadora. Desde entonces, la competencia se da en un suelo común —de ahí los casi cuarenta años de democracia política—, lo cual ha permitido que el debate sea *por algo más* que la democracia como “reglas del juego”. Más igualdad o más libertad, más Estado o más mercado, más latinoamericanismo o más atlantismo, más comunidad o más individualidad, son los ejes que vertebran a las principales voluntades políticas existentes. Hoy la discusión política en la Argentina, sin dejar de lado sus particularidades nacionales y su condición periférica, se ha vuelto más reconocible en términos de las democracias occidentales.

Esto supone dos transformaciones que han dado lugar, de algún modo, a fuerzas políticas renovadas o incluso inéditas. Por una parte, las tradiciones nacional-populares —especialmente el peronismo— se han dejado permear por valores de cuño liberal político, como fundamentalmente los Derechos Humanos, reivindicaciones de género y de autonomía individual, y las social-reformistas —socialistas democráticos y el ala izquierda del radicalismo— han tendido a reconciliarse con las formas de lo popular provenientes del imaginario nacional-popular, abandonando su antiguo anti-peronismo. Esto ha dado pie a la constitución de un espacio progresista, de centro-izquierda, en el cual resultan reconocibles trazas del alfonsinismo, de la renovación peronista² y del centro-izquierda clásico, que coaguló —aunque sin agotarse— en el kirchnerismo, con su transversalidad y diversas al(m)as. No casualmente, el actual presidente de la nación, Alberto Fernández —antiguo jefe

² La Renovación Peronista fue una corriente interna que entre 1984 y 1988 buscó terminar con la vieja dirigencia política y sindical del peronismo responsable de la derrota electoral de 1983, así como democratizar la vida partidaria instaurando el voto directo de los afiliados para la elección de dirigentes y candidatos. Buscó un perfil más político que sindical para el justicialismo y se acercó al estilo inaugurado por Alfonsín, con el que colaboró durante la crisis institucional de 1987, aunque manteniéndose como oposición desde posiciones socialcristianas. Sus principales dirigentes fueron Antonio Cafiero, Carlos Grosso, Carlos Menem y

de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2008)— abrió y cerró su discurso de toma de posesión recordando a Alfonsín, al que citó más que al propio Perón.

Por otra parte, las tradiciones liberales, conservadoras y nacional-popular de derecha —tanto radicales como peronistas— han confluido a su vez en un centro-derecha autopercebido como republicano y anti-populista (Semán, 2021), aunque no por ello necesaria ni primordialmente anti-peronista. No sólo porque sectores peronistas —como Pichetto o Monzó³— lo integran, sino porque su antinomia es con el kirchnerismo, al que no dudan incluso en contraponerlo al peronismo histórico, en tanto éste —o más bien su propio líder— fue más bien refractario a sus corrientes internas de izquierda. Hoy explicitar el anti-peronismo probablemente deje fuera de juego a cualquier actor político. La auto-comprensión de quienes pertenecen a esta fuerza como “anti-populistas” puede ser visto como un modo precisamente de eludir el viejo anti-peronismo, otrora identidad manifiesta de fuerzas y dirigentes como Pedro E. Aramburu o Américo Ghioldi.⁴ El propio Macri cerró su campaña electoral en 2015 inaugurando un busto al General Perón,

José Manuel De la Sota. La Renovación logró sus objetivos dentro del partido. Luego Menem se enfrentó a este movimiento y derrotó a Cafiero en la interna para las elecciones presidenciales de 1989, en las que obtuvo la victoria sobre el candidato de la UCR, Eduardo Angeloz, inaugurando un gobierno de diez años.

³ Miguel Ángel Pichetto fue entre 2002 y 2019 el presidente del bloque justicialista de la Cámara de Senadores de la Nación. Como tal, en 2008 defendió la emblemática ley del kirchnerismo de subir las retenciones a la exportación de los grandes empresarios agropecuarios, que dio lugar al llamado “conflicto del campo”, para muchos el “momento populista” del kirchnerismo. La ley fue finalmente derrotada y el proyecto, retirado. En 2019, Pichetto fue el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, quien buscaba su reelección. Fundó un movimiento llamado Peronismo Republicano, que reivindica el peronismo histórico por oposición al kirchnerismo. Por su parte, Emilio Monzó fue intendente y ministro en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo entre 2003 y 2009, hasta que se alejó a raíz del “conflicto del campo”. Tuvo un destacado papel en la organización de la coalición que llevaría al gobierno a Macri, en cuyo mandato (2015-2019) fue presidente de la Cámara de Diputados nacional.

⁴ Pedro E. Aramburu fue el segundo presidente de facto de la autodenominada Revolución Libertadora, el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Perón en 1955. Representó el sector más duro del antiperonismo de derecha,

acompañado por sindicalistas peronistas en ese entonces alejados del kirchnerismo.

Un dato relevante de esta fuerza de centro-derecha —y un aporte para la democracia— es que se mantenga unida tras el fracaso de su gobierno y su primera derrota electoral importante en las presidenciales de 2019, cuando no pudo renovar su mandato. Parece ir dándose allí una coagulación de rasgos similares a la que se produjo en el otro polo desde la propia recuperación de la democracia.

El contrapunto entre estos dos grandes espacios, aunque similar al que suele darse entre socialdemócratas y neoliberales, no se expresa siempre en esos términos, alejados de las tradiciones políticas argentinas. En muchas ocasiones y dependiendo de los escenarios, se canaliza a través de las dicotomías más tradicionales de la lucha política nacional: peronismo-antiperonismo, republicanismopopulismo, pueblooligarquía, democracia-dictadura, patria-antipatria.⁵

La conformación de estos dos grandes vectores de centro-izquierda y centro-derecha y la consolidación de la democracia como único juego político legítimo pueden verse como resultado de diversos factores históricos. Mi hipótesis es que el principal de ellos es la inédita represión ilegal que ejerció la dictadura militar desde el golpe de Estado de marzo de 1976, sumado al fracaso de ese proyecto político en todas sus facetas (económica, militar, política). El terrorismo de Estado, que alcanzó niveles antes desconocidos en el país, ayudó a trazar de nuevo la frontera política en Argentina. Si hasta entonces (1945-1983) el antagonismo se había dado principalmente entre peronismo y antipe-

siendo el ideólogo de la proscripción del partido y su líder, de la sustracción y ocultación del cadáver de Eva Perón y de la persecución de los militantes peronistas. En 1962 fundó Unión del Pueblo Argentino (UDELPA). Por su parte, Américo Ghioldi, dirigente del Partido Socialista Democrático, representó al más inflexible antiperonismo de izquierda. No sólo saludó el golpe de Estado de septiembre de 1955, sino también el bombardeo de la Plaza de Mayo de meses antes, que tenía el propósito de desalojar a Perón de la Casa de Gobierno. Ghioldi apoyó el fusilamiento ilegal de militantes peronistas rebelados contra la dictadura de Aramburu en 1956, que éste ordenó. Más tarde, Ghioldi sería embajador de la dictadura de Videla.

⁵ Agradezco el comentario de Santiago Curci sobre este punto.

ronismo, tras la derrota en Malvinas la dictadura simbolizó todo aquello que para la democracia resultaba sencillamente inaceptable. Esto coadyuvó a resituar a los antiguos enemigos políticos en un mismo campo, precisamente el de la democracia, y a que el pilar ético-político de ésta pasaran a ser los Derechos Humanos. Esto supuso la entrada del peronismo — simbolizado en su figura más representativa para *toda* la comunidad, Eva Perón— en un oficioso, y por eso intensamente político, panteón nacional. La justicia social y el protagonismo popular, más allá de la sospecha de muchos de que el peronismo no había tramitado esos rasgos siempre a través de canales y formas democráticas, pasaron a ser reconocidos como el aporte histórico clave de ese movimiento y, como tales, componentes ineludibles de la aspiración democrática. Pero mientras nadie estaba exento de graves inconsecuencias democráticas en su pasado —ahí está la proscripción del peronismo y su persecución entre 1955 y 1972, apoyada y promovida por los antiperonistas de izquierda y de derecha—, ninguna fuerza política que se pretendiera democrática podía convalidar el terrorismo de Estado de la dictadura.

Otro rasgo de la democracia como proceso en Argentina es la formidable vitalidad política del país. Aquí debería hablarse más bien de un rasgo histórico que se ha mantenido. La historia argentina es la de las fechas de sus movimientos sociales y políticos, desde la Revolución del Parque de 1890 hasta la crisis del 2001, pasando por la Reforma universitaria de 1918, la emergencia del peronismo en 1945, el Cordobazo de 1969 y la recuperación de la democracia en 1983, por citar solo algunos. El tesoro de la política argentina es que cada problema e incluso tragedia ha hecho brotar sujetos nuevos, movilizaciones horizontales propias de una comunidad en la que nadie se adocena estando fuera. Ahí están los movimientos de Derechos Humanos (Madres y Abuelas, principalmente) que enfrentaron el horror de la dictadura, los piqueteros que se movilaron contra el neoliberalismo que los condenaba al desempleo, y el movimiento feminista que hizo posible la conquista de nuevos derechos para las mujeres. Quizá el único punto bajo fue la despolitización menemista, restañada por el kirchnerismo, que volvió a unir juventud y política, tal como Alfonsín y los movimientos de Derechos Humanos en 1982-83.

Ya se ve por qué este contrapunto entre centro-izquierda y centro-derecha resulta más legible en clave de la contraposición socialdemocracia-neoliberalismo que en los viejos términos peronismo-antiperonismo. Porque en éste los actores se percibían mutuamente como no democráticos e incluso como no argentinos propiamente dichos, mientras que ahora —más allá de la llamada “grieta”⁶— se consideran básicamente adversarios legítimos, en tanto comparten la democracia y ciertos valores comunes, aunque los interpreten de modos diversos.

Esto da pie a una situación paradójica. En efecto, cabía pensar que el fin de la división interna del espacio nacional-popular como frontera política comunitaria traería un reforzamiento de los valores progresistas, sobre todo tomando en cuenta que el espacio de centro-derecha tardó más en conformarse, ya que al fin y al cabo llegó al gobierno por primera (y hasta ahora única) vez en 2015, doce años después que el kirchnerismo. Esto no ha sido del todo así, en especial en algunos temas clave. Más bien, el contrapunto entre centro-izquierda y centro-derecha parece sentarle mejor a ésta que a aquélla. Se objetará que el poder mediático es una fuerza profunda capaz de moldear los marcos de la discusión pública en unos términos que favorecen a la derecha. Desde luego, aunque la tosquedad del autodenominado “periodismo de guerra”⁷ también podría resultar contraproducente para sus propios intereses. Pero mi hipótesis es que tal predominio no tiene lugar sólo por la fuerza del

⁶ “La grieta” alude al enfrentamiento entre kirchneristas y antikirchneristas, fraguado sobre todo a partir del llamado “conflicto del campo”, de 2008. Remite a la división, presentada habitualmente como irreconciliable, entre ambos sectores, la cual no sólo atañe a la vida pública, sino también a la privada, permeando las relaciones personales (amigos, familia, trabajo, etcétera). Su intensidad es vista a menudo como impropia de una democracia, por lo cual en general —salvo excepciones— ningún actor político la reivindica. Hasta tal punto que el gobierno actual de Alberto Fernández —pese a ser él mismo elegido por Cristina Fernández de Kirchner como candidato a presidente— basa parte de su identidad en reconstruir los lazos de unión entre los argentinos. Así lo explicita su lema de gobierno: “Argentina unida”.

⁷ Esta expresión fue utilizada por uno de los periodistas más importantes del Diario *Clarín* para definir la posición que había adoptado el medio ante el kirchnerismo.

centro-derecha, sino asimismo por la debilidad —especialmente conceptual y programática— del progresismo argentino.

Para muestra, basten dos botones: pobreza e impuestos (Kessler y Assusa, s/f). Ambos problemas no son sólo hegemónicos, sino recurrentemente puestos sobre la mesa por la derecha en su favor. En efecto, el debate sobre la cuestión social ha sido absorbido, monopolizado por el problema de la pobreza, cuyo índice es mostrado como el paradigma de la injusticia social. El propio Macri pidió al inicio de su mandato que su gobierno fuera evaluado por su capacidad de reducir la pobreza.⁸ Con esto lograba varias cosas. Además de anudar pobreza y “populismo”, señalando a sus adversarios como los causantes —muchas veces interesados, para ejercer el clientelismo, según este relato— de aquélla, consiguió algo aún más importante para sus intereses: desvincular pobreza y riqueza, como si *no* se tratara de dos caras de una misma moneda. De este modo, desligó a su vez pobreza y desigualdad, como si aquélla no fuera una consecuencia de ésta. En efecto, es posible reducir la pobreza y conservar la desigualdad, incluso aumentarla. En eso consisten las medidas neoliberales puntuales de ayuda contra la exclusión y la miseria extremas (Figueras, 2013: 13). Lo que no forma parte de la cosmovisión neoliberal es combatir la pobreza a través de la reducción de la desigualdad, pues entiende que ésta es resultado de la diferencia de méritos.⁹

⁸ La trayectoria histórica de la demanda de justicia social, desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta hoy, resulta sintomática. Alfonsín buscó vincularla a la democracia a través de su lema de campaña “con la democracia se come, se cura y se educa”. En 1989, Menem prometía un “salario” como salida de la hiperinflación. Hasta allí, pocas novedades: se mantenía a grandes rasgos y con las variaciones partidarias lógicas la centralidad de la justicia social que había traído el peronismo clásico. El cambio hacia posiciones defensivas, de evitación de la exclusión, vendrá tras el gobierno neoliberal de Menem en los 90. En efecto, la Alianza, que ensaya un gobierno fallido entre 1999 y 2001, la nombró más bien como un resultado de frenar la corrupción. Néstor Kirchner, tras la debacle del 2001, habló de “un país normal” y Cristina Fernández de Kirchner enfatizó la “inclusión social”. El macrismo cerraría el círculo en 2015 proponiendo “pobreza cero”.

⁹ Para la concepción neoliberal de la pobreza, véase Czarnecki (2013).

El discurso del centroderecha monopoliza también la cuestión impositiva. El sistema tributario argentino es regresivo, en tanto proporcionalmente pagan *más* quienes *menos* tienen, porque a) penaliza el consumo al basarse en impuestos indirectos generalizados como el IVA (con una alta tasa del 21 por ciento) y además al gravar más la renta de las empresas —capaces de trasladar esa carga a los precios— que la de las personas físicas; b) se centra más en el ingreso salarial que en las rentas financieras; c) recauda poco por impuestos patrimoniales, esto es, por la riqueza acumulada (López Accotto, Martínez, Mangas y Páparas, 2019: 11-132).

Sin embargo, el discurso hegemónico —político y, sobre todo, mediático— sostiene una y otra vez que “los argentinos pagan muchos impuestos”. Aunque no es así, el progresismo debería tomar en consideración esa percepción,¹⁰ dados sus efectos políticos. En efecto, un sistema impositivo que grava más el consumo y los ingresos que la riqueza se centra en quien trabaja en el sector formal percibiendo un salario, abandona al que trabaja informalmente y beneficia al que más tiene. Estos sectores, además, reciben a cambio bienes y servicios públicos deficientes, si bien la privación resultante no es la misma, pues las capas medias y media-altas pueden obtenerlos en el ámbito privado. Esto torna verosímil *para ellas* el discurso neoliberal de la “voracidad estatal”, más allá de que el Estado apunte a esos sectores precisamente por debilidad y no por fortaleza.

Si el centroizquierda no prioriza la reforma del sistema impositivo hacia su progresividad, para afrontar la situación objetiva y subjetiva de los sectores formales asalariados y la de los condenados a la informalidad, el desapego entre sociedad y Estado seguirá creciendo, para único beneficio de la extrema derecha neoliberal ahora en ascenso.¹¹ Además, ésta rechaza el sistema tributario actual por confiscatorio en nombre de

¹⁰ Sobre la relevancia de las percepciones en la cuestión tributaria, véase Grimson y Roig (2011: 87-119).

¹¹ Al respecto, es muy interesante lo que Figueras (2013: 24) denomina “la trampa de los bienes públicos” en América Latina, que produce lo que cabría llamar un círculo vicioso en términos de desigualdad: “los bienes públicos son de mala calidad, lo que lleva a los sectores medios a exiliarse de los mismos tan pronto

“lo que ocurre en los países serios y desarrollados del mundo”, cuando en verdad éstos deben su crecimiento y cohesión social a la progresividad fiscal y a la fortaleza del Estado, justo lo opuesto de lo que sucede en América Latina (Jiménez, 2017: 52-77; Ajos y Pla, 2019: 49-83; Figueras, 2013: 17-20), la región más desigual (CEPAL, 2017) —que no más pobre, que es África (ACNUR, 2017)— del mundo. El resultado de ese relato hegemónico es el desprestigio del hecho impositivo y el debilitamiento creciente del Estado, instrumento clave para la recomposición de la equidad fiscal.

Las fuerzas progresistas, pese a la rica investigación científica existente, no tienen un discurso acerca del aumento de la desigualdad en la Argentina desde 1975 hasta hoy (Bayón, 2006: 133-152; Altimir, Becarria y González Rosada, 2002: 55-85). Periodo que incluye, obviamente, el de la recuperación de la democracia,¹² inaugurado con el objetivo de reunir lo que habían dividido las distintas sensibilidades nacional-popular y progresista: democracia política (“reglas del juego”) y justicia social. Así quedó plasmado en la ya famosa afirmación de Alfonsín: “con la democracia se come, se cura y se educa”. Esa idea-fuerza preanunciaba, prometía y alentaba la confluencia de las distintas corrientes igualitarias a la que hoy asistimos. Pero en la promesa está la carencia, la prioridad ineludible de lo que queda por hacer.

Aquí parecen operar también los límites de estas tradiciones. La nacional-popular, basada históricamente en la alianza entre trabajadores y burguesía “nacional”, ha tendido a utilizar el Estado para contener la lucha de clases, eludiendo la progresividad fiscal, y ha apostado al desarrollo del mercado interno, al pleno empleo, a los dividendos de la renta agraria y a los ingresos directos como factores necesarios y sufi-

sus ingresos se lo permiten (automóvil en vez de transporte público, educación privada, salud privada, segregación residencial, aseguramiento privado). Este autoexilio de las elites y los sectores medios altos y medios, implica que los bienes públicos carecen de demandantes exigentes y poderosos en materia de calidad, lo que retroalimenta una baja provisión de bienes públicos de calidad. Entonces, la sociedad se segmenta por capacidad de compra privada y los bienes públicos y colectivos se deterioran”.

¹² El porcentaje de pobreza y el índice de desigualdad (Gini) en el Gran Buenos Aires son peores en 2016 que en 1974. Véase Banco Mundial (2018: 17).

cientes para la redistribución de la riqueza. Estos recursos ya no están disponibles como en la época clásica de la ISI. Por su parte, las corrientes socialdemócratas, engrosadas por las clases medias y desligadas del mundo sindical, han visto en la educación —sin ocultar su ambición de *ilustrar* a esas masas que les eran esquivas— el motor de la igualdad de oportunidades. Ambas miradas impidieron hacer de la progresividad fiscal la clave del financiamiento del bienestar. En Europa, aun en tiempos de crisis de la socialdemocracia, el centro del debate electoral sigue siendo la cuestión impositiva.

La estructura social argentina es la de los 90, la que edificó el menemismo, no sin amplio apoyo popular. La mejor experiencia igualitaria de los últimos cincuenta años —los gobiernos kirchneristas (CEPA, 2016; Repetto y Potenza Dal Masetto, 2012: 13-15)— sólo pudo combatir la exclusión (Kessler, Assusa, s/f: 16; Figueras, 2013: 21), apoyándose en el crecimiento que trajo la exportación de *commodities* (Banco Mundial, 2018: 20).

Las transformaciones que trajo a la política argentina el prolongado proceso democrático reabierto en 1983 han producido un acercamiento relativo de las fuerzas políticas nacionales a las existentes en las democracias occidentales. Sin embargo, perduran rasgos de las tradiciones históricas particulares, como la ausencia de la identificación del tema impositivo como factor de redistribución de la riqueza. En la Argentina el neoliberalismo ha sido capaz no sólo de formar una fuerza política propia, sino de impregnar a otras formaciones, como fue en su día el peronismo a través del menemismo y hoy la UCR, sumada al macrismo. Sin embargo, en el momento en que cuenta con una formación semejante a la socialdemocracia, como sería el Frente de Todos, la progresividad fiscal —clave en el ideario socialdemócrata y en el pacto social de la segunda posguerra europeo— no parece ocupar un lugar relevante en su programa. Si Alfonsín encarnó un esbozo socialdemócrata finalmente fallido debido a su desconexión del mundo sindical, el kirchnerismo parece frustrar un intento similar por carencias programáticas.

Pero, ¿por qué el progresismo argentino debería *volverse* socialdemócrata?, ¿es otro intento velado de desperonización, o un deseo inconfeso de *européizar* la política argentina, muy propio —no casualmente— de cierta izquierda reformista frustrada por el peronismo? No

descarto nada, pero en mi hipótesis hay una razón que probablemente ni esa izquierda reformista, ni el propio peronismo acepten del todo de buena gana: a la vuelta de la historia y bajo la luz de las décadas transcurridas desde la emergencia del peronismo —que son las mismas del pacto de bienestar de posguerra— cabe afirmar que el peronismo jugó un papel muy similar al de la socialdemocracia europea. Esto es, el de construir la democracia social, con la diferencia de que en Argentina ésta no tenía como base segura la propia “democracia política”, todavía en juego. Cuando dejó de estarlo, a partir de 1983, el peronismo ha ido aglutinando —no sin desprendimientos, retrocesos y con transformaciones internas— a las fuerzas que luchan por una democracia social, tal como los partidos socialdemócratas europeos aún hoy. Sus adversarios y sus problemas respectivos son los mismos, las fuerzas neoliberales que buscan reducir el Estado pues, en ausencia de cualquier peligro mayor —antes encarnado por el mundo soviético—, ya no están dispuestas a financiar la igualdad. Lo que se viene dando hace décadas en el mundo occidental es la reducción de la democracia social a mera democracia electoral. Y si bien hoy enfrenta dificultades inéditas debido a la globalización, la progresividad fiscal ha resultado un mecanismo tan eficaz de producción de igualdad en Europa como inexplorado en Argentina.

Aceptando lo anterior, no obstante se podrá objetar que no está el mundo para que un país periférico como la Argentina resuelva en términos de democracia social lo que otras naciones centrales y con larga tradición socialdemócrata no están pudiendo sostener. El argumento es plausible y acertado. Pero no se trata de *resolver* el problema, sino de identificarlo a través de un diagnóstico claro, cierto y traducible a la acción política. De hacer ver los problemas a los demás tal como los ve uno, que es en lo que consiste en definitiva la hegemonía. La derecha neoliberal viene repitiendo hace décadas los mismos *leitmotivs* de reducción del Estado, rebaja impositiva y reducción del “gasto político”, a pesar de que los ha llevado a cabo y producido con ello la creciente desigualdad que hoy vemos. Las fuerzas progresistas deberían tomar nota para luchar políticamente por aquello que constituye su razón de ser, la igualdad, sin la cual —al menos para ellas— no es posible una democracia plena. Esto supone hacerse cargo, sin rubores, de la parte

que les corresponde en el fracaso de la democracia social en la Argentina, a fin de encaminarse a reparar ese daño.

Bibliografía

- ACNUR (2017). ¿Cuáles son los países más pobres del mundo? 14 de febrero. Disponible en: <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/cuales-son-los-paises-mas-pobres-del-mundo>
- Altimir, O., L. Beccaria y M. González Rosada (2002). La distribución del ingreso en Argentina, 1974-2000. *Revista de la CEPAL*, (78), 55-85. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/10851-la-distribucion-ingreso-argentina-1974-2000>
- Ayos, E. J., y J. L. Pla (2019). Trabajo, condiciones de vida y bienestar. Un análisis de las fuentes de ingresos individuales y familiares en perspectiva comparada. España y Argentina. En A. Salvia y M. B. Rubio (comps.). *Tendencias sobre la desigualdad: aportes para pensar la Argentina actual* (pp. 49-83). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires-Instituto de Investigaciones Gino Germani. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20190920101935/Tendencias_sobre_la_desigualdad.pdf?fbclid=IwAR2mdGX-OBah_r7afRz5zdJqu-0YVQYdY2S4JL4Qnsm969R3OwrnNmz_LCxX
- Banco Mundial (2018). Hacia el fin de las crisis en Argentina: Prioridades para un crecimiento sostenible y prosperidad compartida. Disponible en: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/693981558012501931/pdf/Summary.pdf>
- Bayón, M. C. (2006). Precariedad social en México y Argentina: tendencias, expresiones y trayectorias nacionales. *Revista de la CEPAL*, (88), 133-152. Disponible en: https://www.academia.edu/10235865/Precariedad_social_en_M%C3%A9xico_y_Argentina_Tendencias_expresiones_y_trayectorias_nacionales
- CEPAL (2016). Desigualdad. Un cambio con ganadores y perdedores. Octubre. Disponible en: https://gallery.mailchimp.com/e9c6f62a4dc825f6a9da-b4e88/files/Desigualdad_Octubre_2016.pdf
- CEPAL (2017). Pese a avances recientes, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Comunicado de prensa. 8 de junio. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pese-avances-recientes-america-latina-sigue-siendo-la-region-mas-desigual-mundo>

- Czarnecki, L. (2013). La concepción de la pobreza en el modelo neoliberal. ¿Cómo entender la lucha contra la pobreza en México? *Frontera norte*, 25 (49). Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722013000100008
- Figueras, F. (2013). Los regímenes de bienestar en el ocaso de la modernización conservadora: posibilidades y límite de la ciudadanía social en América Latina. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 22 (2). Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-499X2013000200002
- Grimson, A., y A. Roig (2011). Percepciones sociales de los impuestos. En J. Nun (comp.). *La desigualdad y los impuestos II* (pp. 87-119). Buenos Aires: Capital intelectual.
- Jiménez, J. P. (2017). Equidad y sistema tributario en América Latina. *Revista Nueva Sociedad*, (272), 52-77.
- Kessler, G., y G. Assusa (s/f). Informe Foro Universitario del Futuro. Pobreza, desigualdad y exclusión social. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pobreza_y_desigualdad_editado.pdf
- López Accotto, A., C. R. Martínez, M. Mangas y R. Paparas (2019). Los impuestos a la riqueza en Argentina en una perspectiva comparada. *Revista Economía y Desafíos del Desarrollo*, I (4), 111-132. Disponible en: <http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/revistaedd/3n2/>
- Repetto, F., y F. Potenza Dal Masetto (2012). Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Argentina. Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4028/S2012966_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Semán, E. (2021). *Breve historia del antipopulismo*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.